

La medida se toma dos días después de que el Tribunal de Cuentas galo advirtiera de que la economía francesa está en "zona de peligro".

El Gobierno francés aprobó este miércoles un paquete de medidas que incluye especialmente una subida de impuestos con el fin de recaudar dinero extra que le permita cumplir con los objetivos de reducción del déficit. Dos días después de que el Tribunal de Cuentas galo advirtiera de que la economía francesa está en "zona de peligro", el Ejecutivo que preside Jean-Marc Ayrault desveló las medidas con las que pretende superar una situación de riesgo para sus finanzas.

Esa institución reclamó ahorros suplementarios de hasta 10.000 millones de euros en 2012 y un esfuerzo añadido de hasta 33.000 millones de euros en 2013, a lo que este miércoles respondió el gobierno de izquierdas con incrementos de impuestos.

París espera recaudar este año 7.200 millones de euros con el objetivo de cumplir el compromiso de reducir en 2012 el déficit público al 4,5 % del Producto Interno Bruto (PIB). El dispositivo más importante en términos de recaudación es la supresión de exenciones en el impuesto sobre la fortuna (ISF), con el que se esperan 2.300 millones de euros.

Esto implica retroceder en reformas impositivas aplicadas por el anterior gobierno conservador de François Fillon, y dictadas por el expresidente Nicolas Sarkozy.

Así, se da marcha atrás en la anunciada subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que debía entrar en vigor en septiembre próximo para compensar una reducción de las cotizaciones que pagan las empresas y los trabajadores, con la que Sarkozy pretendía incrementar la competitividad de las compañías francesas.

Las empresas francesas tendrán que aportar el 47 % del dinero que el Ejecutivo quiere conseguir con los incrementos de impuestos, en primer lugar (1.000 millones de euros) con el fin de las exenciones en las cotizaciones al pagar las horas extraordinarias, salvo en las de menos de 20 asalariados.

Además se crea una tasa del 3 % sobre los dividendos que pretende penalizar a los grupos que reparten beneficios entre sus accionistas en lugar de dedicarlos a invertir, lo que reportará unos 300 millones de euros en 2012 y entre 800 y 1.000 millones anuales a partir de 2013.

El tipo de la contribución social que habrá que pagar por las opciones sobre acciones ("stock options") y sobre las acciones gratuitas pasará del 22 % al 40 %.

Igualmente se incrementa, del 0,1 % al 0,2 % la tasa sobre las transacciones financieras y del 0,25 % al 0,5 % la relativa a las entidades financieras "sistémicas".

Otro impuesto, éste de carácter excepcional, gravará las reservas petroleras con un 4 % (550 millones en 2012) y afectará a los grandes grupos del sector, pero también a la distribución, que venden buena parte del combustible a los particulares.

En la línea de hacer pagar a los más privilegiados, el umbral de las exenciones fiscales en las donaciones y en las sucesiones pasará de 159.325 a 100.000 euros.

El Ejecutivo ha previsto la congelación de 1.500 millones de euros de gasto público para poder cumplir los objetivos de déficit, pero no ha querido precisar hasta ahora recortes precisos, y en particular no ha querido dar cifras sobre reducción en empleos en las administraciones.

El primer ministro, Jean-Marc Ayrault, había revisado ayer ante la Asamblea Nacional las previsiones de crecimiento tanto para este año (0,3 % en lugar del 0,7 % estimado anteriormente) como para 2013 (1,2 % en lugar del 1,7 %).

Con ese nuevo escenario, la deuda pública superará este año el umbral simbólico del 90 % hasta el 90,6 % a fines de diciembre frente al 89,7 % doce meses antes.

Si se cumplen las metas de déficit público (3 % del PIB en 2013, 2,25 % en 2014, 1,5 % en 2015, 0,75 % en 2016 y 0 % en 2017), la deuda pública tendría que disminuir al 82,4 % en 2017, al término del mandato de Hollande.